



IFFD

INTERNATIONAL FEDERATION FOR FAMILY DEVELOPMENT

ES

Rufino Blanco, 8 · 3B - 28028 Madrid (España)

www.iffd.org

IFFD PAPERS nº 15

PRODUCIDO POR



THE FAMILY WATCH
www.thefamilywatch.org

Crisis y fractura social en Europa: causas y efectos en España

1 de diciembre de 2012

La crisis que venimos atravesando desde el año 2007 a nivel internacional es de una extraordinaria complejidad y sus efectos sobre algunos rasgos básicos de nuestras sociedades no han hecho sino comenzar. Existe el riesgo de que la crisis financiera de 2007 esté evolucionando hacia una crisis de la cohesión social a partir de 2010, al menos en ciertos países como España, y en este proceso de transformación interactúan factores diversos que se retroalimentan mutuamente. No es fácil así predecir hasta dónde puede verse afectada la cohesión de unas sociedades como las europeas, que habían hecho de este rasgo un elemento de identidad.

Impacto desorbitado de la crisis en el mercado de trabajo

Es sobradamente conocido el desproporcionado impacto que la crisis económica ha tenido en el aumento del desempleo en España, lo que en ocasiones se ha puesto de manifiesto con la rigidez del mercado de trabajo y la sobreprotección de las relaciones laborales. Del análisis comparativo se desprende, sin embargo, que más que a una cuestión cuantitativa –más o menos flexibilidad– nos enfrentamos a una diferencia cualitativa que tiene que ver con el modelo de flexibilidad y con la gestión política y empresarial que se hace de ella.

Sabemos que la relación entre la dinámica económica y la evolución del desempleo no presenta siempre una relación directa (depende de la productividad y la distribución del tiempo de trabajo). Esa variabilidad fue señalada ya en los informes de la UE que abordaban esta cuestión en las primeras fases de la crisis (EU-SPC y EU Commission, 2009). Especialmente relevante parece el ejemplo mostrado a este respecto por la OIT (Torres, 2009): la reducción de las horas trabajadas en España (–2% en 2009 respecto del año anterior) fue menor que la media de un total de 35 países de PIB alto (–2,2%), frente a una reducción de –3,8% para Dinamarca y –3,1% para Alemania, que presentaban un impacto mucho más reducido en la tasa de desempleo. En este último país, en aquel momento se habían incorporado ya 1,5 millones de trabajadores al programa de reducción subvencionada de la jornada (Kurzarbeit). La relación entre ambas cuestiones es obvia.

El modelo de mercado de trabajo dualizado en España ha demostrado un extraordinario nivel de flexibilidad, sobreactuando en su reacción a la reducción de la actividad económica, y el número de desempleados se ha multiplicado por 2,7. El ajuste se ha concentrado en el sector secundario de los empleos temporales, de baja cualificación, y ha afectado muy especialmente a los jóvenes y a los extranjeros. En contraste, el caso francés, con un mercado de trabajo también aparentemente dualizado, pero con un modelo de gestión política y empresarial de la flexibilidad muy distinto, ha permitido mantener mucho más el empleo gracias a los altos niveles de protección social y laboral, y también a una práctica amplia de la flexibilidad interna, que, por otro lado, ha generado un volumen importante de subempleo. Aquí las dificultades de los extranjeros en la inserción laboral eran previas a la crisis, pero no se han experimentado cambios significativos en este sentido.

En el Reino Unido, el modelo de flexibilidad generalizada, con fuertes incentivos negativos por la debilidad de los sistemas de protección al desempleo, ha ocasionado el aumento tan significativo del desempleo, un 69% hasta 2010 –con una concentración también importante en ciertos sectores de hogares sin empleo–, y sobre todo han empeorado las condiciones de trabajo y la remuneración salarial. Sin embargo esto ha sido parcialmente compensado por un sistema de protección de mínimos muy pensado para la cobertura social del subempleo y del empleo precario. Aquí las brechas de género y étnica aumentan con la crisis.

En Dinamarca, el desempleo es significativamente menor que en los otros países analizados, como es propio de su conocido sistema de ‘flexiguridad’, y solo uno de cada tres desempleados continúa en esa situación al cabo de un año (frente al 58% de España). Sin embargo, las restricciones establecidas en los programas asistenciales han limitado su capacidad protectora frente a la crisis y han hecho que el desempleo aumente más.

El análisis comparativo nos sugiere que el impacto diferencial de la crisis económica en la destrucción de empleo en nuestro país no se debe exclusivamente a una estructura económica con amplios sectores de baja productividad –concretamente a la caída del sector de la construcción–, sino que también tiene que ver con el modelo dual de gestión de la flexibilidad. Es este sentido, por tanto, un primer margen para la acción colectiva con el objeto de reducir el coste social de los períodos recesivos.

La reforma laboral recientemente aprobada en España en un contexto de contracción del mercado –orientada a reducir esa dualidad del mercado de trabajo a largo plazo (a la baja)– difícilmente tendrá incidencia real en la recuperación del empleo a corto plazo y, sin embargo, ha privado de importantes mecanismos de protección del empleo, que parecen haber funcionado en otros casos, como en Francia, combinados con fuertes dosis de flexibilidad interna, para evitar el aumento del desempleo. A medio plazo, el mantenimiento de los trabajadores en sus puestos de trabajo, aún con una menor dedicación, parece una vía muy razonable de mantener el capital humano en espera de la recuperación económica.

Aumento de las desigualdades y de la pobreza

Pero las desigualdades que genera el mercado no tienen por qué traducirse directamente en desigualdades en el nivel de ingresos. Aquí también la experiencia de los países analizados muestra una gran diversidad. Así, Dinamarca es el país donde las rentas del mercado son más desiguales y donde más ha crecido incluso esa desigualdad en el período de crisis analizado. Sin embargo, sigue siendo el país más igualitario en cuanto a la distribución de la renta disponible en los hogares, gracias a las fuertes transferencias de las políticas sociales. Por el contrario, Francia o Alemania, donde las diferencias en el mercado no han aumentado significativamente en estos años, han visto aumentar las desigualdades en la renta disponible. El Reino Unido habría visto incluso reducirse las desigualdades de ingresos hasta 2010 debido al aumento de ingresos de los más pobres, aunque también de los muy ricos. Frente a estos casos, España muestra el modelo de Estado de bienestar menos eficiente: es el que menos reduce las desigualdades generadas en el mercado, aunque ha aumentado ligeramente la reducción del riesgo de pobreza gracias a las transferencias sociales, del 49% al 52% entre 2007 y 2010. Fruto de todo ello, España, que era de estos cinco países el menos desigual en rentas del mercado antes de la crisis, se posiciona en un preocupante tercer lugar, en la UE-27 en 2010, en cuanto al nivel de desigualdad de ingresos –índice de Gini–, y se ha distanciado también en los extremos de la desigualdad social: el 10% más rico tiene ahora cinco veces más ingresos que el 10% más pobre –la diferencia ha aumentado un 16,3% desde 2007– sobre todo por el empeoramiento de la situación de los más pobres.

El aumento del desempleo en nuestro país es un factor muy sustancial para explicar esta evolución, pero no es suficiente: la tasa de riesgo de pobreza de las personas ocupadas ha aumentado en España dos puntos porcentuales, de forma similar que en Dinamarca, mientras que se mantenía estable en el conjunto de Europa (en países como Francia) o incluso disminuía en el Reino Unido. Este fenómeno de expansión de los ‘working poor’ se explica en parte por la erosión de las condiciones de trabajo que han venido acompañando a la explosión de las tasas de desempleo, pero también por el derrumbe de la estrategia de combinación de varios ingresos bajos en el hogar al perderse el salario de alguno de sus miembros. Sin embargo el elemento más preocupante es el hundimiento de las rentas más bajas, que ha hecho aumentar muy significativamente la proporción de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza más severa (por debajo del 30% de la renta mediana equivalente). España ha experimentado el crecimiento más importante de la pobreza severa entre los países analizados –un punto porcentual–, llegando al 5,2%, el doble que el resto. Dinamarca y Francia han visto también aumentar significativamente sus bolsas de pobreza severa, aunque partían de niveles muy inferiores, algo que posiblemente puede tener que ver con los procesos de reforma de los dispositivos asistenciales emprendidos en ambos países. Por el contrario, otros países como el Reino Unido o Alemania lograban incluso reducir la pobreza severa. También es en España donde

más ha aumentado la intensidad de la pobreza: los pobres han visto aumentar más la distancia al umbral. Se rompe así en nuestro país una tendencia de varias décadas de reducción de los niveles de pobreza severa y la senda de lenta convergencia con los países de referencia que venía desarrollándose hasta estos años.

Solo las personas mayores de 65 años, en especial las que viven en pareja, han experimentado una mejoría en este sentido, y muy ligeramente las mujeres, en cambio los jóvenes y las parejas con hijos se han visto mucho más afectados en España: para los menores de 25 años ha aumentado un punto la pobreza severa, hasta situarse en el 7,1%, y las parejas con hijos han crecido en 1,6 puntos, hasta el 6,5%: ocupan en ambos casos la primera posición de forma destacada entre los países analizados. En esto se han seguido pautas muy distintas de las de países como Dinamarca y el Reino Unido, donde la pobreza severa ha aumentado entre los mayores de 65 años. En este último país, hasta los jóvenes han mejorado significativamente.

Estas distintas dinámicas están directamente relacionadas con ciertas opciones en las políticas sociales. Las consecuencias en nuestro país pueden ser especialmente graves al constreñir los itinerarios vitales introduciendo incluso un riesgo de cronificación en los sectores con mayor proyección vital, los jóvenes, así como por los procesos de reproducción generacional que implican en las parejas con hijos.

El empobrecimiento de los extranjeros con esta crisis es una tendencia más general en Europa, con la excepción destacable del Reino Unido entre los países analizados. Esta tendencia contrasta más cuando tiene un sentido inverso al de la población nacional como en el caso de Francia –donde la pobreza se reduce en las personas de nacionalidad francesa– y en menor medida en España (donde las personas de nacionalidad española mantienen el mismo nivel de antes de la crisis). En unos sitios más que en otros, la población extranjera ha asumido el papel de amortiguador de los efectos sociales de la crisis cargando con una mayor parte de los costes –desempleo, empobrecimiento, embargos...–. Esto se va a convertir en un serio condicionante para los procesos de integración social, especialmente de los sectores recién llegados.

En conjunto, esta crisis nos deja en Europa una bolsa de 81 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza; de ellas, casi una de cada ocho corresponde a España. Dicha cifra está bastante estabilizada en Europa, pero en España, según las últimas estimaciones para 2011 (el INE calcula un 21,8%), la población en riesgo de pobreza habría aumentado en 1,4 millones desde 2007, una tendencia que no es generalizable en el conjunto de la Unión.

La crisis y los límites del modelo familista

Hemos mostrado que la cobertura familiar sigue siendo un factor ineludible en el análisis de las interrelaciones entre el contexto económico y las dinámicas de la exclusión social, especialmente en países como España. Solo el 6,4% de los hogares afectados por el desempleo en España son de una persona sola. En contraste, la proporción en Dinamarca es de cuatro sobre diez; Francia y el Reino Unido se sitúan en una posición intermedia.

La incidencia del desempleo en los hogares en España aumenta con el tamaño de la familia, pero no solo como efecto de una mayor probabilidad estadística. El desempleo total familiar –todos los activos del hogar en paro– afecta en España al 7,6% de los hogares y su incidencia es un punto porcentual mayor en los hogares de más tamaño, a pesar de una menor probabilidad estadística, prácticamente el doble que en los otros países analizados, y nos habla de los límites de la cobertura familiar cuando los problemas de empleo se extienden a todos los miembros activos.

En esos casos, encontrar otros recursos sustitutivos de las rentas del trabajo puede ser vital. Y así, en uno de cada cinco hogares en desempleo total familiar vive alguna persona mayor de 65 años. Aquí, la pensión del abuelo puede convertirse en un recurso esencial para la supervivencia de todos: el número de estos hogares se ha triplicado en estos cuatro años y ya representa unas 300.000 familias en España.

Además, el tamaño de la familia aumenta también en España con la incidencia del desempleo. El desempleo retrasa la emancipación de algunos y hace volver a otros al hogar de origen, una realidad difícilmente apreciable todavía en términos estadísticos pero conocida por los dispositivos de intervención social. La convivencia larga con los padres y la emancipación tardía de los jóvenes se han convertido en una característica estructural de la sociedad española, dentro de un patrón común con otros muchos países del sur y del este de Europa. Las diferencias con los países analizados son extraordinarias, especialmente en el tramo entre 25 y 34 años: 36,5% para España frente al 1,3% para Dinamarca, con Francia y el Reino Unido en una posición intermedia. Sin embargo, la crisis no ha incrementado esta proporción, como cabría prever, sino que, en sentido contrario, se ha reducido 3,5 puntos porcentuales la proporción de los jóvenes que viven con sus padres. Esta reducción nos revela las dificulta-

des para estirar la cobertura de las familias a sus hijos e hijas más allá de lo que ya se hacía en el período anterior de bonanza. Hay que decir que, aun así, la proporción de los jóvenes desempleados que viven en casa de los padres prácticamente se ha duplicado en estos años.

Las limitaciones de las familias para dar una cobertura satisfactoria a los jóvenes en España, en un contexto en el que el mercado de trabajo les da pocas opciones, se aprecian también en la expansión de la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan. Estas situaciones, potencialmente problemáticas en el presente y con mayores probabilidades de desarrollar procesos de exclusión social en el futuro, han aumentado en España en todos los grupos de edad, pero muy significativamente entre los mayores de 20 años, con un aumento superior a nueve puntos porcentuales entre 2007 y 2009: uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años en España no estudia ni trabaja, la proporción más alta de los países analizados. También esta proporción ha aumentado entre los más jóvenes (entre 16 y 20 años), hasta alcanzar el 14,4%. En ninguno de los países la tendencia es tan general –en todas las edades–, tan clara ni prematura. En Dinamarca el fenómeno es muy poco significativo y en el Reino Unido y Francia tiene una incidencia más intermedia.

Es importante destacar que estas situaciones se producen a pesar de la estrategia de muchos jóvenes y de sus familias de prolongar los estudios, especialmente una vez que se supera la ESO: la proporción de jóvenes entre 16 y 20 años que continúa estudiando ha aumentado más de nueve puntos porcentuales, y 4,5 entre los de 21 y 25 años. Nuevamente aquí se repite el diagnóstico: mayor esfuerzo para las familias con la crisis y más situaciones que se escapan de su capacidad protectora.

El ciclo económico influye pues en la expansión de estas situaciones, pero de distinto modo según los países, como consecuencia de la confluencia de dos tipos de factores: el origen familiar –presencia en España de más familias con menor nivel educativo– y un sistema escolar que, en nuestro caso, con una tasa de abandonos prematuros notablemente superior y con menos becas, aboca a muchos jóvenes al desempleo y la inactividad. Es en estos últimos aspectos donde cabría incidir por tanto en las políticas educativas si se pretende reducir la tendencia a la exclusión social en el futuro. La expansión de la oferta formativa becada para los jóvenes desempleados, especialmente para los que abandonan prematuramente sus estudios en la ESO, combinada con un sistema de becas que potencie el mantenimiento en las aulas parece ser una opción muy razonable a corto plazo para reducir los riesgos de exclusión social de este grupo. La potenciación del sistema de formación profesional con un modelo dual que permita un contacto directo con el sistema productivo es una estrategia también interesante a medio plazo. En este ámbito, las experiencias alemana –en cuanto a formación profesional– y danesa –en ayudas al estudio– nos ofrecen un ejemplo envidiable del que poder aprender.

Consuelo León Llorente.

Profesora de Sociología de la Universitat Internacional de Catalunya.

Resumen y comentario del estudio 'Crisis y fractura social en Europa - Causas y efectos en España' (Obra Social 'la Caixa', Colección de Estudios Sociales, n. 35, octubre 2012).

Disponible en: http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/pdf/estudiossociales/vol35_es.pdf

© The Family Watch 2012

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente los puntos de vista de la International Federation for Family Development, The Family Watch o cualquier otra institución, sino que son de exclusiva responsabilidad del autor. Se publica bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial 3.0 Unported.
